



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, 29 JUL 2020

Auto Interlocutorio No. _____

MAGISTRADO PONENTE: RONALD OTTO CEDEÑO BLUME

MEDIO DE CONTRO:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
EXPEDIENTE:	760001-33-33-006-2019-00077-01
DEMANDANTE:	DABEIBA PAZ QUIÑONEZ
DEMANDADO:	RED SALUD NORTE E.S.S
ASUNTO	APELACIÓN DE AUTO – CONFIRMA AUTO QUE NIEGA PRUEBAS

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

Se procederá a resolver el recurso de apelación propuesto por la parte demandada, contra el auto nro. 161 de fecha 2 de marzo de 2020, proferido en audiencia inicial por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Cali, mediante el cual negó el decreto y practica de la prueba testimonial solicitada.

II. ANTECEDENTES

En ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 138 del CPACA y actuando a través de apoderado judicial, la señora Dabeiba Paz Quiñonez, demandó a la Red de Salud del Norte E.S.E., para que se declare la nulidad de los oficios nro. 1.8.291.2018 del 12 de octubre de 2018 y nro. 1.8.331.2018 de fecha 28 de noviembre de 2018 mediante los cuales se negó la solicitud de reajuste salarial de conformidad con el Acuerdo nro. 106 de 2003, con el porcentaje de incrementos que ha decretado el Municipio de Santiago de Cali, desde el año 2004 hasta la actualidad.

III. DE LA PROVIDENCIA APELADA:

Mediante auto interlocutorio nro. 161 de fecha 2 de marzo de 2020¹, proferido por el Juzgado Sexto Administrativo de Cali en audiencia inicial, negó el decreto de la prueba testimonial solicitada, que la prueba solicitada es innecesaria como quiera que en el presente asunto se solicita un incremento salarial, surgiendo una controversia relacionada con las facultades legales de la demanda para el incremento salarial de la demandante y la interpretación jurídica de las normas relativa a este tema, asunto de pleno derecho frente al cual resulta inconducente la prueba testimonial, pues la prueba documental allegada y la que se declarará de oficio surgen suficiente para resolver el litigio. (Intervención Min: 0:10:52 a 0:11:33 – Ver folio 43).

IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

La apoderada judicial de la parte demandada presentó recurso de apelación contra el auto nro. 161 de fecha 2 de marzo de 2020, proferido por el Sexto Administrativo Oral del Circuito de Cali, manifestando que las personas Javier Montoya Gómez y Viviana Soto Ospina son los funcionarios encargados de todo el trámite administrativo que deviene en los incrementos salariales o en el trámite de incrementos que salariales se

¹ Ver folios 39 a 42



realiza anualmente dentro de la entidad y eso para mayor documentación del señor juez al momento de proferir decisión(...)" (Intervención Min: 0:12:32 a 0:13:11 – Ver folio 43)

CONSIDERACIONES:

5.1. COMPETENCIA

De conformidad con el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, el auto mediante el cual se niega el decreto o la práctica de una prueba es susceptible del recurso de apelación, siendo competente en segunda instancia el Tribunal para desatar el mismo.

5.2. PROBLEMA JURÍDICO

El asunto que se discute se contrae a establecer:

Corresponde a este Despacho determinar si hay lugar a decretar la prueba solicitada por la apoderada judicial de la parte demandada tendiente a citar como testigos a los señores Javier Montoya Gómez y Viviana Soto Ospina, para que depongan sobre los hechos que soportan la defensa de la entidad demandada.

5.3. DEL DECRETO DE PRUEBAS

Conforme lo establecido en el artículo 180² de la Ley 1437 de 2011, en la audiencia inicial el Juez decretará las pruebas pedidas por las partes y terceros, siempre que sean necesarias para demostrar los hechos sobre los cuales existe inconformidad.

El artículo 211 de la Ley 1437 de 2011, establece que en los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en materia probatoria, en lo que no esté expresamente regulado se aplicarán las normas del Estatuto Procesal Civil, hoy Código General del Proceso.

Por su parte, la Ley 1564 de 2012 en su artículo 168 establece que *"El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles"*, así las cosas, de la norma en cita se colige que, para determinar el decreto de las pruebas solicitadas por las partes, se debe analizar si éstas cumplen con los requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad.

5.4. CASO CONCRETO

De conformidad con el artículo 320³ del C.G.P, aplicable por remisión del artículo 306⁴ del CPACA, se procederá a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte demandada, pronunciándose solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso interpuesto.

² Artículo 180. Audiencia inicial. Vencido el término de traslado de la demanda o de la de reconvenición según el caso, el Juez o Magistrado Ponente, convocará a una audiencia que se sujetará a las siguientes reglas:
(...)

10. Decreto de pruebas. Solo se decretarán las pruebas pedidas por las partes y los terceros, siempre y cuando sean necesarias para demostrar los hechos sobre los cuales exista disconformidad, en tanto no esté prohibida su demostración por confesión o las de oficio que el Juez o Magistrado Ponente considere indispensables para el esclarecimiento de la verdad.

³ Artículo 320. Fines de la apelación.

El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.

Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71.

⁴ ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

A su turno, el artículo 328 ibídem dispone entre otros aspectos que: *“el juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley”*.

Del tenor literal de la norma en cita, concluye el Despacho que la voluntad del legislador es que, en virtud del recurso de apelación el superior estudie y revise la decisión proferida por el a quo, pero con una característica especial, y es que dicha instancia se limita a aquellos precisos cargos expuestos por el recurrente al sustentar su inconformidad, los cuales, se encuentran limitados, en virtud de la congruencia, a lo decidido por el juez en primera instancia.

Aclarado lo anterior, en este caso tenemos que el a quo decidió negar por innecesaria e inconducente la prueba testimonial solicitada por la entidad demandada respecto de los señores Javier Montoya Gómez y Viviana Soto Ospina, al considerar que el asunto en cuestión es de pleno derecho, pues, la controversia se circunscribe a confrontar las facultades legales de la entidad demandada para el incremento salarial de la demandante y la interpretación jurídica de las normas relativas al tema. Además de considerar que la prueba documental allegada y la decretada de oficio son suficientes para resolver el litigio.

Por su parte, la apoderada judicial de la entidad demanda, pretende se revoque la decisión del a quo y se decrete la prueba testimonial, al argumentar que las personas llamadas a rendir testimonio son los funcionarios encargados de todo el trámite administrativo que deviene en los incrementos salariales que se realizan anualmente dentro de la entidad, lo que a su parecer puede brindar mayor documentación al Juez para el momento de proferir sentencia.

Ahora bien, sobre el decreto de la prueba el Consejo de Estado, a dicho:

“Las disposiciones del Código General del Proceso, en relación con el régimen probatorio, indican que las pruebas deben referirse al asunto materia del proceso y que “el juez rechazará mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles.”⁵

Lo anterior significa que para determinar si procede el decreto de las pruebas propuestas por las partes, el juez debe analizar si estas cumplen los requisitos de conducencia, pertinencia, utilidad y legalidad. La conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. La pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relación con el litigio. La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se pretende demostrar con la prueba no esté suficientemente acreditado con otra.”⁶

Frente al tema probatorio, el Consejo de Estado⁷ en reciente jurisprudencia recordó:

“(....)

23. Conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado⁸, se considera que para verificar:
*i) la **pertinencia** de una prueba se debe revisar que guarde relación con los hechos que se pretenden demostrar; ii) la **conducencia** de una prueba se debe revisar que el medio*

⁵ Artículo 168. Rechazo de plano.

El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles.

⁶ Auto del Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. C.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Bogotá, 20 de mayo de 2015. Radicación No. 76001-23-33-000-2012-00691-01.

⁷ Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, providencia del 22 de mayo de 2019, Radicación número: 05001-23-33-000-2018-02345-01(PI).

⁸ Consejo de Estado, Sección Cuarta, providencia de 7 de febrero de 2013, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, número único de radicación 25000232700020100016201; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 1.º de marzo de 2016, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 25000232400020029000303.

*probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho, para lo cual: a) el medio probatorio respectivo debe estar autorizado y no prohibido expresa o tácitamente por la ley; y b) el medio probatorio no debe estar prohibido en particular para el hecho que con él se pretende probar⁹; iii) la **utilidad** de una prueba se debe revisar que no sea manifiestamente superflua; es decir, que no tenga razón de ser porque ya están probados los hechos o porque el hecho está exento de prueba¹⁰; y iv) la **licitud** de la prueba(...)*"

Acerca del decreto de las pruebas, el mismo Consejo de Estado¹¹ ha dicho:

"Las disposiciones del Código General del Proceso, en relación con el régimen probatorio, indican que las pruebas deben referirse al asunto materia del proceso y que "el juez rechazará mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles."¹²

Lo anterior significa que para determinar si procede el decreto de las pruebas propuestas por las partes, el juez debe analizar si estas cumplen los requisitos de conducencia, pertinencia, utilidad y legalidad. La conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. La pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relación con el litigio. La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se pretende demostrar con la prueba no esté suficientemente acreditado con otra."

"En desarrollo del principio de economía, una prueba será inútil cuando el hecho que se quiere probar con ella se encuentra plenamente demostrado en el proceso, de modo que se torna en innecesaria y aún costosa para el debate procesal.

Para que una prueba pueda ser considerada inútil primero se debe haber establecido su conducencia y pertinencia, que son presupuestos de utilidad.

En virtud de este principio, serán inútiles las pruebas que tiendan a demostrar hechos notorios, hechos debatidos en otro proceso o hechos legalmente presumidos.

Teniendo en cuenta los anteriores lineamientos, en el caso concreto se observa que se negó la prueba testimonial solicitada por considerarla innecesaria, atendiendo a que la fijación del litigio se circunscribe a un asunto de pleno derecho.

Al respecto, el Despacho considera que la prueba testimonial solicitada por la entidad demandada no reúne los requisitos de conducencia pertinencia y utilidad, por cuanto, si bien se indica que su finalidad es que los funcionarios declaren sobre los hechos que soportan la defensa, no se señala expresamente en que pueden enriquecer al juez para resolver el litigio en cuestión, esto es el reajuste salarial de la demandante en los incrementos decretados por el Municipio de Santiago de Cali para todos los servidores públicos desde el 2004, o de manera subsidiaria con el incremento decretado por el Gobierno Nacional desde el 2012.

Por lo anterior, se concluye que le asiste razón al a quo, en cuanto niega la solicitud de la prueba testimonial de la entidad demandada, toda vez que lo que se discute es un asunto que se puede corroborar con la prueba documental pertinente, a la luz de la normatividad y la jurisprudencia aplicable al presente asunto.

⁹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B providencia de 23 de julio de 2009, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, número único de radicación 25000 23 25 000 2007 00460 02.

¹⁰ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de 3 de marzo de 2016, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, número único de radicación 11001 03 25 000 2015 00018 00.

¹¹ Auto del Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. C.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Bogotá, 20 de mayo de 2015. Radicación No. 76001-23-33-000-2012-00691-01.

¹² Artículo 168. Rechazo de plano.

El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles.



Radicación : 2019-00077-01
Medio de control : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Demandante : DABEIBA PAZ QUIÑONEZ
Demandado : RED SALUD NORTE E.S.S.

En consecuencia, es evidente que la prueba testimonial solicitada no procede para demostrar aspectos de puro derecho que le corresponden al juez interpretarlos.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Despacho procederá a confirmar el auto interlocutorio nro. 161 de fecha 2 de marzo de 2020, proferido en audiencia inicial por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Cali, por las razones expuestas.

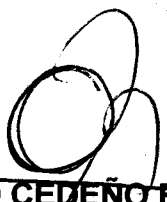
En consecuencia, se;

RESUELVE

PRIMERO.- CONFIRMAR el auto interlocutorio nro. 161 de fecha 2 de marzo de 2020, proferido en audiencia inicial por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Cali, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: En firme la presente decisión, remítase el expediente al Juzgado de origen, para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,


RONALD OTTO CEDEÑO BLUME
Magistrado

02TCR/54602000m0/10

Don Yerald Lopez
Vice Sec. Secretario